

SA-0054-2018

AUTO No. 0860

29 NOV 2024

Por el cual se pronuncia el despacho con respecto a las pruebas dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Obrando de conformidad con la Ley 1333 de Julio 21 de 2009, en armonía con la Ley 1437 de 2011 y la designación conferida mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 1306 del 29 de julio de 2016, emitido por la CDMB, y de acuerdo con la designación conferida mediante la Resolución CDMB No. 199 del 16 de marzo del 2020 y teniendo en cuenta:

Radicación: Expediente Sancionatorio SA-0054-2018

Infractor: INGOBAR S.A. nit 900-324-832-7, Representada legalmente por Fernando Gómez Franco con CC 91.272.694. o quien haga sus veces.

Informe Técnico: Memorando SEYCA-GEA- 371-2018 de 19/06/2018.

Lugar de la presunta afectación: Corregimiento punto Vegas, Río de Oro, Sector La playa – El Establo, barrio Café Madrid del Municipio de Bucaramanga.

COORDENADAS

N: 7°9'50,01"

E: 73°08'38,19"

ANTECEDENTES

A través de memorando SEYCA-GEA- 371 - 2018 de 19/06/2018, la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, remitió a la Coordinación de Procesos Sancionatorios informe técnico de fecha 01/06/2018 para la identificación y valoración de una presunta infracción ambiental, en el cual se registraron hechos acaecidos en el predio arriba identificado.

Mediante auto No 376 de 31/10/2018 el despacho ordenó apertura de investigación administrativa sancionatoria debido a que la investigada incumplió el plan de manejo ambiental que le fuere concedido dentro de una explotación minera. Dicha providencia fue notificada en debida forma.

Con la expedición del Auto N° 947 de 28/11/2022 se efectuó la formulación de cargos en contra de los investigados, de la siguiente manera:

"CARGO ÚNICO: Infracción ambiental al artículo 4, parágrafo 1 de la Resolución No.000049 del 14 de enero de 2011 de la CDMB: "Por el cual se aprueba un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de explotación minera de hecho y se dictan otras disposiciones"; artículo

1

SA-0054-2018

5.1.1 del Plan de Trabajo y Obras - PTO del contrato de concesión FIK-112, aprobado mediante Auto GLM No. 0013 del 2 de enero de, 2010 y modificado mediante Auto PARB No. 0142 del 10 de febrero de 2016 de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA; y artículo 1.2 del Concepto Técnico de Evaluación Técnica del Plan de Manejo Ambiental - PM del 7 de agosto de 2010 de la CDMB, el cual hace parte integral de las consideraciones tenidas en cuenta para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución No. 000049 del 14 de enero de 2011 de la CDMB: "Por el cual se aprueba un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de explotación minera de hecho y se dictan otras disposiciones".

Dicha providencia fue debidamente notificada y en cumplimiento del debido proceso, derecho de defensa y contradicción, de conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, se otorgó un término de diez (10) días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes, sin embargo, en este caso se evidencia que la parte investigada no hizo uso de su derecho a presentar descargos, frente a los cargos formulados, ni se aportó o solicitó prueba alguna dentro del expediente.

I. FUNDAMENTOS JURIDICOS

A) COMPETENCIA

La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB**, es un ente corporativo de Carácter Público de Orden Nacional, descentralizado creado por la Ley 99 de 1993, está dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, **EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES**, propendiendo por su desarrollo sostenible y la protección de los mismos, así como por dar cumplida y oportuna aplicación a la normatividad vigente.

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "*Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación*".

El medio ambiente es un Derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

La planificación se realiza mediante una serie de mecanismos que permitan analizar, evaluar y prever unas circunstancias que faciliten la toma de decisiones, con el fin de alcanzar un objetivo propuesto, en este caso, el Desarrollo Sostenible.

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí el objeto para crear el Ministerio de Ambiente y Vivienda Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) como organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al

que corresponde impulsar una relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación y preservación.

El artículo 31 Numeral 2 de la Ley 99 de 1993, le señaló a las Corporaciones Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

El artículo 79 de la misma Carta consagra: *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”


El Artículo 80° de la Constitución Política, establece que: *“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.*

De acuerdo con el marco normativo de la Ley 1333 de 2009 el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través de las Corporaciones Autónomas Regionales, señalando en su Artículo 1° *“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.*

“Parágrafo. *En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”* (negrilla fuera de texto)

B) PROCEDIMIENTO

Régimen jurídico aplicable: Si bien es cierto el proceso sancionatorio ambiental se encuentra especialmente reglamentado por la ley 1333 de 2009, dicha norma establece aspectos que han de ser regulados por el Código Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, sin embargo y considerando que el mismo fue derogado, para los efectos del presente proceso, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 1437 de 2011, que se encontraba en vigencia al momento de la ocurrencia de los hechos que motivaron la investigación.

 Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, *“que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen*

SA-0054-2018

las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993”.

Que, a su vez, el artículo 5 de la misma Ley establece que “se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente”.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que “el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas Ambientales.”

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 señala que: “La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.”

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26:

“Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas”.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Se procederá a resolver sobre la respectiva etapa procesal probatoria, con el fin de establecer la fijación de los hechos y obtener con certeza de las infracciones y/o afectaciones ambientales ocasionadas con el objeto de determinar el camino procesal a seguir; esta Autoridad Ambiental analizará las pruebas que obran en el expediente **SA-0054-2018**.

Ahora bien, considerando que el procedimiento especial sancionatorio ambiental regulado en la Ley 1333 de 2009 no prevé los criterios para determinar la pertinencia, conducencia y necesidad de los medios probatorios, pero sí lo relacionado con la Práctica de pruebas, con respecto a las formalidades que preceden la valoración de las mismas, las cuales son requeridas de manera oficiosa por la Autoridad que adelanta el proceso; Así mismo, acudiendo a lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso de lo Administrativo, se evidencia que dichas disposiciones tampoco definen los criterios de admisión de los medios de prueba lo que a la postre obliga a acudir a lo preceptuado en la Ley No. 1562 de 2012 “Código General del Proceso” artículo 168 “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente

impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles." de no cumplir estos criterios serán rechazadas por la autoridad judicial.

De acuerdo con lo anterior y partiendo de la necesidad procesal de la decisión administrativa, es necesario indicar que éstas deben ceñirse al tema entendido como los "hechos que es necesario probar, de forma tal que la adecuación de un medio de prueba en un proceso en concreto determina su pertinencia, es decir, las pruebas deben buscar que el hecho que se pretende demostrar tenga una relación directa con el hecho investigado, por ello, la finalidad de la prueba es la fijación de los hechos, para así corroborar la afectación que se está efectuando.

La necesidad de la prueba es que no se trate de un medio de prueba superfluo, o lo que es lo mismo, que no verse sobre hechos que ya están demostrados dentro del proceso. Es por ello que, para evitar la repetición de pruebas en el plenario, la autoridad podrá valorar formalmente esta condición, salvo que sea verdaderamente necesaria para su confrontación procesal.

Sumado a lo anterior, tenemos que de acuerdo con las normas procedimentales y la concepción de los fines de la prueba, estas están vinculadas a los fines generales del proceso (aplicar el derecho a un caso controvertido mediante una decisión, pues es la función jurisdiccional), pero también tienen las pruebas sus fines particulares o específicos, que coadyuvan para la obtención del fin general: **lograr producir la convicción del funcionario competente, aportarle un conocimiento de los hechos mediante la formación sobre ellos de juicios verdaderos, en grado de certeza, llegando lo más cerca posible a la realidad.**

Con base en lo enunciado, y teniendo en cuenta que las pruebas deben cumplir los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entenderán por tanto que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio y finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.

Una vez revisadas las piezas procesales que componen el expediente **SA-0054-2018**, se evidencia que la parte investigada, no hizo uso de su derecho a presentar descargos ni aportar o solicitar pruebas en su defensa.

El presente proceso inició por el reporte de hechos realizado a través de **informe técnico de fecha 01/06/2018, que versa de manera detallada sobre el despliegue de actividades contraventoras de la normatividad ambiental.**

De acuerdo con lo anterior y dadas las circunstancias que rodean el presente proceso sancionatorio, el Despacho considera que obra en el expediente material probatorio suficiente para posterior al decreto de pruebas, proceder a la etapa procesal a través de la cual se definirá la responsabilidad ambiental; teniendo en cuenta que no es necesario el decreto de pruebas de oficio; considerándose de esta manera la ausencia de la conducencia, utilidad y pertinencia del decreto de prueba alguna adicional.

0860 29 NOV 2024

SA-0054-2018

Así las cosas, una vez analizado el expediente en comento, este despacho no dará apertura al periodo probatorio ni dispondrá de los treinta (30) días para la práctica de pruebas, dispuestos en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, al no encontrarse pruebas para practicar, diferentes a las documentales ya incorporadas, las cuales serán valoradas en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en la Resolución que define responsabilidad.

Corolario de lo anterior, comoquiera que no se dispuso la práctica de alguna prueba, no se correrá traslado para presentar alegatos de conclusión como quiera que ellos procederán únicamente cuando se hayan practicado pruebas en el periodo probatorio previsto.

Así las cosas, una vez analizado el expediente, considera este despacho pertinente tener como pruebas documentales las siguientes:

1. PRUEBAS DOCUMENTALES RECAUDADAS:

1. Memorando SEYCA – GEA – 0371-2018 de 19/06/2018 de remisión de informe técnico (fl 1)
2. Informe técnico para la identificación y valoración de una presunta afectación ambiental de fecha 01/06/2018 (fls 2ss)
3. Acta de Visita realizada el 09/04/2018 (fl 18)
4. Auto N° 0376 de 31/10/2018 "Por el cual se ordena la apertura de la investigación Administrativa Sancionatoria "(Fls 35 y ss.)
5. Constancias de diligencias de notificación del auto N° 0376 de 31/10/2018 (Fls 40ss)
6. Auto N° 0947 de 28/11/2022 "Por medio del cual se Formulan Cargos" (Fls 45ss)
7. Constancia diligencias de notificación del auto 0947 de 28/11/2022 (Fls. 51ss)

En mérito de lo expuesto se,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE ABRIR PERIODO PROBATORIO y como consecuencia de lo anterior, no se empleará el término de los treinta (30) días para la práctica de pruebas, dispuestos en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, al no encontrarse pruebas para practicar, diferentes a las documentales ya incorporadas en el expediente, las cuales serán valoradas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENER como pruebas documentales la totalidad de aquellas obrantes en el expediente sancionatorio **SA- 0054-2018 y en especial:**

1. Memorando SEYCA – GEA – 0371-2018 de 19/06/2018 de remisión de informe técnico (fl 1)
2. Informe técnico para la identificación y valoración de una presunta afectación ambiental de fecha 01/06/2018 (fls 2ss)

SA-0054-2018

0800
29 NOV 2024

3. Acta de Visita realizada el 09/04/2018 (fl 18)
4. Auto N° 0376 de 31/10/2018 "Por el cual se ordena la apertura de la investigación Administrativa Sancionatoria "(Fls 35 y ss.)
5. Constancias de diligencias de notificación del auto N° 0376 de 31/10/2018 (Fls 40ss)
6. Auto N° 0947 de 28/11/2022 "Por medio del cual se Formulan Cargos" (Fls 45ss)
7. Constancia diligencias de notificación del auto 0947 de 28/11/2022 (Fls. 51ss)

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al infractor **INGOBAR S.A. nit 900-324-832-7, Representada legalmente por Fernando Gómez Franco con CC 91.272.694 o quien haga sus veces**, en la carrera 36 # 24-35 de la Ciudad de Bogotá tel 3176462126, señalando que es necesario indique su dirección de correo electrónico al correo electrónico info@cdmb.gov.co de la Secretaria General - Oficina de Notificaciones, dentro de los siguientes DOS (2) días de recibido del presente documento, con el fin de efectuar la notificación personal.

PARÁGRAFO PRIMERO: El presunto infractor afirmará bajo la gravedad del juramento, que acepta realicen las notificaciones personales a través de este medio, y que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, así mismo, si es allegada la dirección de correo electrónico de apoderado judicial es necesario que coincida con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ante la imposibilidad de suministrar dirección de correo electrónico, con el fin de proceder con la notificación personal establecida, es necesario que indique un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos o en su defecto comparezca a la Entidad en la Carrera 23 No. 37-63, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del presente proveído, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente respecto del contenido del presente Acto Administrativo, a **INGOBAR S.A. nit 900-324-832-7, Representada legalmente por Fernando Gómez Franco con CC 91.272.694 o quien haga sus veces**, en la carrera 36 # 24-35 de la Ciudad de Bogotá tel 3176462126.

PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación personal se entenderá surtida a partir de la fecha y hora en que se acceda al acto administrativo, conforme al artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 67 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: **Abstenerse** de conceder un término para presentar alegatos de conclusión, de acuerdo a lo consignado.

ARTICULO SEXTO: Remítase el expediente a la oficina de notificaciones de la Secretaría General, con el fin de que se surta la respectiva notificación de la presente actuación.

7

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co



0860

SA-0054-2018

29 NOV 2024

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACÓN
Secretario General

Proyectó:	Juan Fernando Bermejo Hernández	Contratista	
Aprobó:	María Catalina Hernández Pinzón	Coordinadora Grupo Defensa Jurídica Integral	<i>[Signature]</i>
Oficina Responsable: Secretaría General /Grupo Procesos Sancionatorios			

Certificado de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.S

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada,
fue entregado efectivamente en la direccion señalada.

Envío entregado en la direccion señalada.



4330 72	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. RPT 900 002 913-9			
	CORREO CERTIFICADO NACIONAL 304		RAS06908217CO	
1111 590	Centro Operativo: PO BUCARAMANGA		Fecha Admisión: 05/12/2024 17:52:47	
	Orden de servicio: 17569355		Fecha Aprob. Entrega: 11/12/2024	
VALORES CERTIFICADOS	Nombre Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESA		Causal Devoluciones:	
	Dirección: ca 23 An 37-83		No existe No existe No recepción No recepción Dirección errada	
VALORES CERTIFICADOS	Referencia: Teléfono: 8146100 Código Postal: 68000402		Código Operativo: 9688461	
	Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER Depto: SANTANDER		Código Operativo: 9688461	
VALORES CERTIFICADOS	Nombre Razón Social: 25931- INDOBAR S.A.		Firma nombre y/o sello de quien recibe:	
	Dirección: CARRERA 36 # 24-35		C.C. Hora: (free)	
VALORES CERTIFICADOS	Tel: 3176462125 Código Postal: 111321360 Código Operativo: 111360		Fecha de entrega: 11/12/2024	
	Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C.		Distribuidor: (free)	
VALORES CERTIFICADOS	Peso Físico(gramos): 200		C.C. Distribuidor: (free)	
	Peso Volumétrico(gramos): 0		Fecha de entrega: 11/12/2024	
VALORES CERTIFICADOS	Peso Facturado(gramos): 200		Distribuidor: (free)	
	Valor Declarado \$0		Fecha de entrega: 11/12/2024	
VALORES CERTIFICADOS	Valor Paga \$15.700		Distribuidor: (free)	
	Costo de manejo \$0		Fecha de entrega: 11/12/2024	
VALORES CERTIFICADOS	Valor Total \$18.200 C.D.P.		Distribuidor: (free)	
	Observaciones del cliente: De por favor traer 2 paquetes de por favor traer 2 paquetes		Fecha de entrega: 11/12/2024	
		56664651115908A506908217CO		
Diseño: Bogotá D.C. Formato: Paginas: 257 # 50 x 70. Export: www.elpostero.com. Impreso: Bogotá, Colombia. D: 2024. N: 2017. Se: Correo. C: 11/12/2024.				

Copyright © 2021 4-72. All rights reserved.



Versión 1.0.0

CORREO CERTIFICADO CJ

Bucaramanga,

CDMB_20981

6DEZ'24 15:04

Señores
INGOBAR S.A.
FERNANDO GÓMEZ FRANCO
 Representante Legal
 Dirección: Carrera 36 N° 24-35
 Celular: 3176462126
 Bogotá

Asunto: Citación Notificación
 Expediente SA-0054-2018 (Auto 0860 del 29 de noviembre de 2024 por el cual se pronuncia el despacho con respecto a las pruebas dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones)

Cordial saludo,

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, por medio de la presente citación y actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, se permite requerirle su comparecencia ante la ventanilla de notificaciones, localizada en la carrera 23 #37-63 piso 1, del municipio de Bucaramanga, con el fin de llevar a cabo diligencia de notificación del acto administrativo del asunto.

En caso de no comparecer dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente citación, se procederá a la notificación por aviso, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

EXPEDIENTE	HECHOS	ETAPA
SA-0054-2018	INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD AMBIENTAL	PERIODO PROBATORIO

Para efectos de lo anotado y dentro del marco de los principios de economía, celeridad y eficiencia en las actuaciones administrativas de los que trata la Constitución Política en su artículo 209 y conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, es posible efectuar la notificación vía correo electrónico a la dirección que Usted de manera expresa indique al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co.

Cordialmente,

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON
 Secretario General

Proyectó:	Santiago Alejandro Rondón Pastrán	Judicante	<i>SE</i>
Revisó:	María Catalina Hernández Pinzón	Coordinador Procesos Sancionatorios	<i>MC</i>
Oficina Responsable:	Secretaría General / Grupo Defensa Jurídica Integral		

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
 PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

